JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., cinco de febrero de dos mil veinticuatro.

Acción de Tutela No. 110014003 042 2023 01336 01

Resuelve el Juzgado la impugnación a que fue sometido el fallo de tutela proferido el 15 de enero de 2024 por el Juzgado 42 Civil Municipal de Bogotá, en la acción de tutela promovida por JESSICA ANDREA VÁSQUEZ SANTANA contra la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ; en la que fueron vinculados la CONCESIÓN RUNT S.A., como administradora del RUNT, a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS en calidad de administradora del SIMIT, la VEEDURÍA DE MOVILIDAD y la ALCALDÍA DE BOGOTÁ.

1. ANTECEDENTES

1.1. La señora Vásquez Santana promovió acción de tutela, reclamando la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa. Solicitó, que tuteladas las aludidas garantías, se ordene al Organismo de Tránsito accionado *“...revocar la orden de comparendo # 11001000000039349309 y la resolución sancionatoria derivada de los mismos e iniciar un nuevo proceso que respete mis derechos fundamentales con el fin de que se me vuelva a notificar y tener la oportunidad de defenderme en audiencia o aceptar la culpa y pagar con descuento”*.

1.2. Como fundamento fáctico expuso, en síntesis, que consultando la página web del SIMIT se enteró que en su contra pesaba la orden de comparendo No. 11001000000039349309, de la cual asegura no haber sido notificada en debida forma, lo que le impidió ejercer los recursos legales frente a la infracción. Por esa razón, interpuso derecho de petición ante la convocada a fin de obtener información sobre el trámite de enteramiento adelantada, quien le indicó que la notificación se efectuó por aviso; sin embargo, manifiesta que dicha intimación no fue acompañada con copia íntegra del acto administrativo, ni existen constancias que efectivamente le haya sido remitida, por lo que, a su juicio, la intimación no se realizó con apego a la ley.

2. EL FALLO IMPUGNADO

El Juzgado de primera instancia, al abordar el caso concreto, centró su estudio en el derecho de petición presentado por la accionante el pasado 06 de diciembre de 2023, mismo que halló acreditado. Precisó, que la solicitud contaba de 14 peticiones puntuales relacionadas con la orden de comparendo No. 39349309,

que no fueron abordadas en su totalidad ni de manera individualizada por la Secretaría de Movilidad al dar contestación el 14 de diciembre de ese mismo año. Por lo tanto, al no brindar una respuesta completa a la petición de la actora, la accionada vulneró su garantía fundamental de petición.

Adicionalmente, respecto de las pretensiones de revocatoria de la orden de comparendo y su resolución sancionatoria, así como el reinicio del trámite contravencional, en que se soportó la acción de tutela, estas fueron denegadas, con fundamento en el requisito de subsidiariedad que rige la presente queja constitucional, aduciendo que la accionante cuenta con otros mecanismos legales para la satisfacción de dichos pedimentos.

En ese sentido, concedió el amparo invocado únicamente para la protección del derecho de petición, ordenando a la Secretaría de movilidad resolver *“de forma íntegra y en el sentido que legalmente corresponda, la petición radicada por la accionante el 6 de diciembre de 2023, pronunciándose de manera individualizada sobre cada una de las solicitudes elevadas, remitiendo la correspondiente respuesta a la dirección previamente informada por la peticionaria y acreditando tal actuación ante esta sede judicial”*.

3. LA IMPUGNACIÓN

En tiempo, la secretaria de movilidad accionada impugnó la sentencia de primera instancia, manifestando, en síntesis, que mediante oficio SDC 202400000306661 del 18 de enero de 2024, dio respuesta a la petición de la accionante, la cual fue notificada ese mismo día a su correo electrónico; de manera que dio respuesta clara y de fondo a la interesada, sin que se evidencie vulneración de sus derechos fundamentales, dado que el cumplimiento de la orden de tutela denota la existencia de un hecho superado, debiendo entonces revocarse la decisión cuestionada.

4. CONSIDERACIONES

4.2. Sea lo primero señalar, que conforme al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales frente a la vulneración o amenaza por la acción u omisión de las autoridades públicas, y en algunos casos de los particulares, siempre que no se disponga de otra vía judicial expedita para ello, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable al tenor de lo preceptuado en los artículos 1º, 5º y 8º del Decreto 2591

de 1991.

4.3. El presente trámite se inició por la presunta vulneración del derecho al debido proceso, garantía constitucional que se encuentra contemplada en el artículo 29 de la Constitución Política que establece:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”, prerrogativa que sin duda ante su desconocimiento es susceptible de protección por vía de la acción de tutela”.

A su turno, el derecho al debido proceso administrativo puede ser entendido como la garantía que poseen todas las personas de concurrir a un proceso justo en que se cumplan todas sus etapas por parte de la autoridad administrativa, respetándose siempre la imparcialidad y el derecho de contradicción.

“Por tanto, el debido proceso administrativo es la garantía que debe acompañar aquellos actos o actuaciones del Estado que pretenden imponer de manera legítima al ciudadano cargas, castigos o sanciones. En este orden de ideas, cuando un sujeto interviene en un proceso administrativo, debe estar siempre enterado de aquellas decisiones que afectan sus derechos, para poder así ejercer los medios de defensa que tienen a su alcance.

(...)

Por ende, el ciudadano que considere que sus derechos han sido conculcados por parte de la Administración, tiene a su alcance la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que en dicho escenario, le sean restablecidos sus respectivos derechos. Con base en lo anterior, la acción de tutela sólo será procedente cuando la vulneración de las etapas y garantías que informan los procedimientos administrativos haya sido de tal magnitud, que los derechos fundamentales de los asociados no cuenten con otro medio de defensa efectivo”.¹

En lo que respecta al derecho a la defensa, este es entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados con los que cuentan las personas inmersas en un proceso judicial o administrativo, para preservar sus intereses y, en este sentido, puedan ser oídas, hagan valer sus razones y argumentos, controvertan, contradigan y objeten las pruebas en contra, soliciten la práctica de otras y ejerzan los recursos a que hayan lugar²

4.4. En el *sub examine*, se advierte que la accionante aduce con la presente acción, la presunta indebida notificación de la orden de comparendo No.

¹ Sentencia T-057/05

² Sentencia T-286/18

11001000000039349309, por lo que solicitó su revocatoria y la de la resolución sancionatoria, dando inicio a un nuevo proceso contravencional. No obstante, dichos pedimentos fueron denegados por el juzgado de primera instancia, decisión contra la que, ni la accionante ni la accionada manifestaron inconformismo alguno, pues dicha negativa no fue objeto de impugnación.

Cabe preciar que las discusiones que atañen a la notificación de la orden de comparendo deberán elevarse dentro del procedimiento ordinario establecido por el legislador, ya sea al interior del trámite contravencional o incluso ejerciendo las acciones pertinentes ante la jurisdicción contencioso administrativa, que se hallaría habilitada, si la discusión está en la indebida notificación, tal como lo dejó ver la Corte Constitucional en la sentencia T-051 de 2016, en la cual estimó que ante la eventualidad de encontrarse frente una indebida notificación del procedimiento administrativo existía el medio de control ante esa jurisdicción “*que se encuentra activo a pesar de que no se agotaron los recursos en sede administrativa*”, si el tema de discusión es justamente la falta de una debida notificación.

En ese orden, debe recordarse que este mecanismo especial de la tutela no fue previsto como un medio de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada del interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar la vulneración o afectación de un derecho. Por lo tanto, encuentra este juzgador ausente el requisito de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, toda vez que la accionante tiene la posibilidad de acudir ante la autoridad competente y ejercer los mecanismos establecidos en la ley para dar a conocer sus inconformidades.

Así las cosas, como la determinación adoptada por el *a quo* frente a las pretensiones de la acción de tutela no fue controvertida, y esta se encuentra ajustada a derecho, será confirmada.

Ahora, frente al derecho de petición que motivó la concesión del amparo, se observa que la solicitud presentada por la accionante el pasado 06 de diciembre de 2023 ante la convocada (PDF 001) contiene 12 requerimientos relacionados con información de la orden de comparendo que pesa en su contra, con los que pidió constancia de trámites de notificación, copia del trámite contravencional, entre otras; y aunque la Secretaría de Movilidad emitió respuesta

el 14 de diciembre del mismo año, no se observa que efectivamente todos los pedimentos hayan sido abordados, pues no se evidenció que la documental requerida fuere entregada a favor de la petente, dando ello lugar a conceder el amparo, conforme lo considero el juzgador de primer grado.

Es más, aunque el Organismo de Tránsito convocado fue notificado de la acción de tutela, no allegó contestación frente a los hechos y pretensiones de ésta, dentro del término otorgado, ni antes de la emisión del fallo que ahora se ataca, pues, en su momento compareció pero se limitó a solicitar un plazo adicional para aportar la respuesta a la tutela. Sin embargo, para la fecha en que se profirió el fallo de tutela de fecha 15 de enero de 2024, dicho informe no obraba en el expediente, por lo que correspondía dar aplicación a la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, lo que sin duda conlleva al amparo del derecho fundamental de petición de la accionante. Por lo tanto, los argumentos presentados en escrito del 15 de enero de 2024 (PDF 025) resultan claramente extemporáneos, pues fueron allegados con posterioridad a la emisión del fallo.

Y aunque con el recurso de impugnación manifestó la convocada haber dado cumplimiento a la orden de tutela, emitiendo la contestación completa frente a la petición de la actora, de dicha gestión solo se tuvo conocimiento con posterioridad al fallo de primera instancia, y por razón del mismo, por lo que no puede considerarse errada la orden dada por el *a quo*, pues la vulneración de la garantía constitucional, para entonces se evidenciaba acreditada. Diferente es que la accionada haya procurado el cumplimiento de la sentencia primigenia, frente a la respuesta otorgada a la tutelante, sin que ello implique de ninguna manera la revocatoria de la misma, pues la verificación de su acatamiento correspondería al juez de primer grado, quien concedió el amparo.

5. CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se confirmará la sentencia impugnada.

6. DECISIÓN DE SEGUNDO GRADO

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de este Distrito Capital de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución,

RESUELVE

6.1 Confirmar el fallo de tutela de fecha 15 de enero de 2024 proferido por el Juzgado 42 Civil Municipal de Bogotá, por lo expuesto en la parte motiva de esa decisión.

6.2. Notificar esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito.

6.3. Remitir las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

DLR

Firmado Por:

Luis Augusto Dueñas Barreto

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 025

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b8083fe34620a5e0cd70083b6e571ca300e686a100c5b389774e0c1f3d5faba4**

Documento generado en 05/03/2024 11:49:00 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>